



Los rastros de un enfrentamiento armado entre las organizaciones de narcotraficantes como Los Zetas y Los Chapos que operan en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria.



El reportero de Milenio, Manuel Dela Cruz, en el extremo derecho, cuando denunciaba en el estado de Chiapas la agresión que sufrió de parte de policías estatales. (Foto René Araujo)



La fuerte presencia militar se ha hecho permanente en el estado de Chiapas.

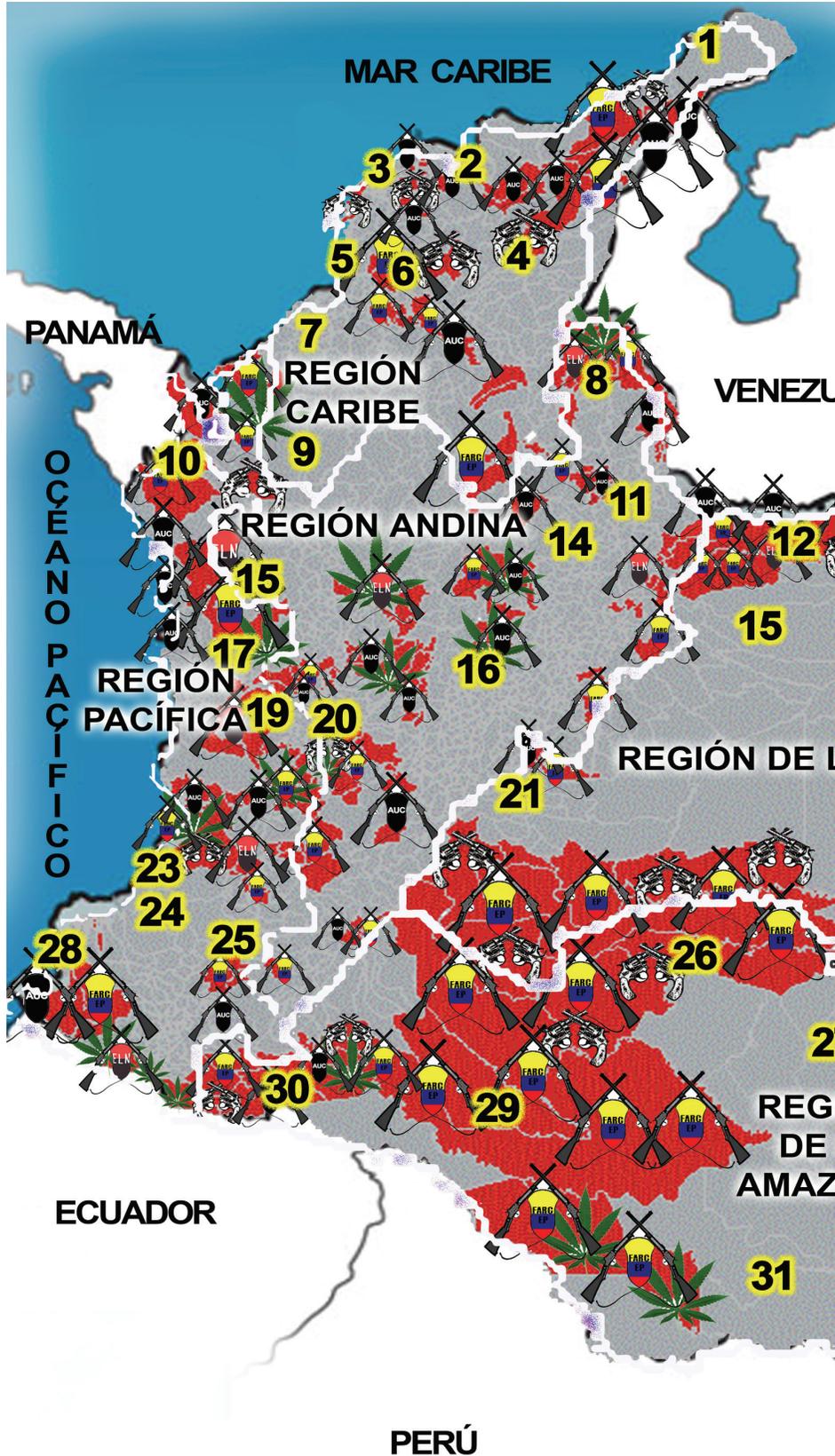
# Colombia

Por Diana Calderón\*

---

\* **Diana Calderón**, periodista diplomada en edición de revistas y procesos electorales. Estudió comunicación social y periodismo. Tiene más de 15 años de experiencia en investigación, cubrimientos especiales y en la dirección y edición de noticieros y revistas. Fue redactora de internacionales de la Casa Editora *El Tiempo* entre 1987 y 1991; y editora general de la revista *Cromos* entre 1992 y 1994. Directora del canal público de Televisión Señal Colombia. Reportera y analista de radio hasta 1997. Directora del noticiero de televisión 24 Horas en Bogotá, Colombia. Presentadora y responsable de investigaciones y reportajes especiales del mismo noticiero hasta 1999. Moderadora del proceso de paz FARC-Gobierno Nacional hasta el 2001. Desde enero de 2000 es la investigadora de la Unidad de Respuesta Rápida de la SIP en Colombia.

---





Delincuencia organizada



Cultivos ilícitos, narcotráfico



Guerrilla del ELN



Guerrilla de las FARC-EP



Guerrilla de las AUC  
(paramilitares)

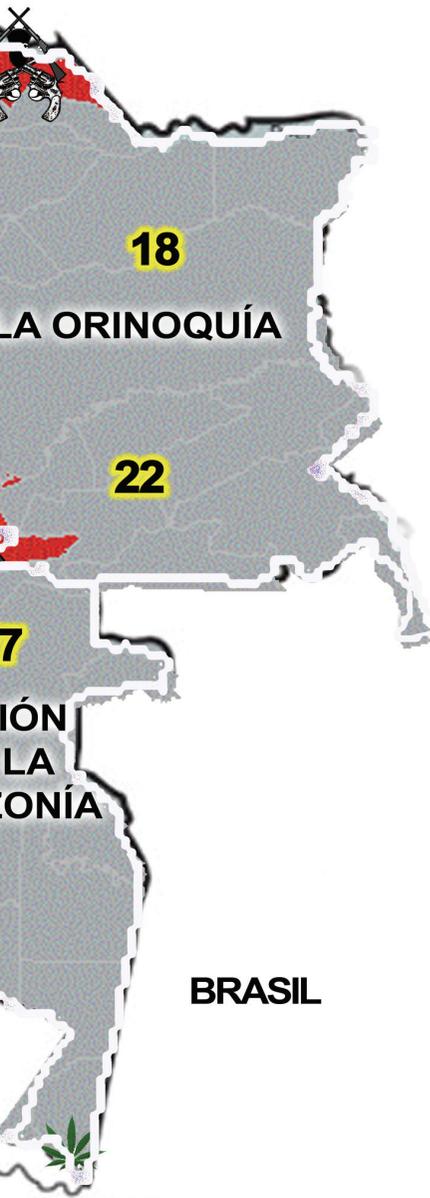


Zona de peligro



Zona sin peligro

UJELA



1. CESAR
2. MAGDALENA
3. ATLÁNTICO
4. BOLÍVAR
5. SUCRE
6. CÓRDOBA
7. ANTIOQUIA
8. NTE. DE SANTANDER
9. SANTANDER
10. BOYACÁ
11. CUNDINAMARCA
12. CALDAS
13. RISARALDA
14. TOLIMA
15. ARAUCA
16. CASANARE
17. VICHADA
18. META
19. HUILA
20. CHOCO
21. VALLE
22. CAUCA
23. NARIÑO
24. GUAINIA
25. GUAVIARE
26. VAUPÉS
27. CAQUETÁ
28. PUTUMAYO
29. AMAZONAS
30. QUINDÍO
31. GUAJIRA



# Introducción

Colombia es un conjunto de regiones diversas, muy distantes en términos de desarrollo, que a veces se desconocen entre sí a pesar de que el conflicto armado y la corrupción política-administrativa no respetan las fronteras regionales. Por eso, el mayor problema que enfrentan los periodistas es el cubrimiento de los temas de la corrupción local, que se nutre de ese conflicto armado y sus relaciones con el narcotráfico.

El conflicto colombiano es viejo y uno de los más complejos del mundo, con sus componentes de paramilitares de derecha, guerrillas comunistas, castristas y maoístas, narcotráfico y la tremenda degradación y violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Sus orígenes se remontan 40 años, cuando, al término de la violencia entre liberales y conservadores, sectores liberales radicales tomaron las armas, afincándose en zonas campesinas marginales. El movimiento evolucionó hacia el comunismo, para constituir las FARC, mientras otra guerrilla, de origen castrista, se consolidaba también (ELN). Los paramilitares o autodefensas, que surgieron en la década del 80 amparados por latifundistas y con la complicidad de los militares, o al servicio de jefes del narcotráfico, crecieron hasta conformar una poderosa organización clandestina de extrema derecha que ha protagonizado las peores violaciones a los derechos humanos. Se trata de la AUC, Autodefensas Unidas de Colombia.

El narcotráfico, que se concentró en Colombia a partir de los años 90, ha prestado ingentes recursos financieros a los grupos armados, que terminaron involucrándose en sus redes, en distintas medidas y modalidades. El impacto de esa mezcla de grupos irregulares, en vastos espacios del país sin presencia estatal y un negocio multimillonario ha conducido a una degradación creciente del conflicto y a que sus raíces políticas, económicas y sociales se confundan con el crimen y las violaciones a los derechos humanos, a las que recurren de manera sistemática guerrilleros y paramilitares.

El impacto del conflicto ha sido distinto en las diversas regiones del país, y los medios de comunicación lo padecen de maneras diferentes. Entre Bogotá, que lo vive esencialmente a través de los medios, y regiones como Arauca, desde donde todos los periodistas tuvieron que salir por amenazas, hay un verdadero abismo. Ciudades como Medellín han visto la violencia del narcotráfico; en Cúcuta se combinaron la violencia guerrillera y paramilitar con el surgimiento reciente del narcotráfico y negocios ilegales como el tráfico de gasolina. Varios medios han sufrido atentados con bombas, sus periodistas asesinados, amenazados u obligados a exilarse.

En departamentos como el selvático Putumayo, fronterizo con Ecuador y en Arauca, en límites con Venezuela, los periodistas trabajan entre los fuegos de las FARC y los paramilitares, enfrentados por el control del territorio.

En la Costa Caribe, el departamento del César y la región del Magdalena Medio, en cambio, los medios se ven obligados a laborar bajo el control de los grupos paramilitares que, incluso hoy, en negociaciones con el gobierno para su desmovilización, ejercen toda clase de presiones y amenazas sobre la radio, la prensa y la televisión locales.

En el sur del país, en Caquetá y Meta, donde las FARC son más fuertes, son ellas, a su turno, las que ejercen todo género de presiones sobre el periodismo local.

Los medios nacionales están en una situación de menor riesgo que los locales, muchos de los cuales adelantan su actividad cotidiana en situaciones de guerra abierta. Es allí, en las regiones, donde se presentan las más frecuentes violaciones a la libertad de expresión y donde los periodistas corren los mayores riesgos. En los dos últimos años, el mayor número de violaciones a la libertad de prensa, en términos de amenazas, presiones, intimidaciones, autocensura y obstrucciones a la labor, se ha presentado, de acuerdo a los informes semestrales de la SIP, en los departamentos de Arauca, Santander, Cesar, Norte de Santander y Huila.

Para el editor adjunto de *El Tiempo*, de Bogotá, **Álvaro Sierra** los sitios de mayor riesgo para el ejercicio periodístico siguen siendo aquellos en disputa entre la guerrilla y los paramilitares, como Arauca y Putumayo.

“En los lugares donde domina un solo actor armado, como la Costa Caribe, Cesar o el Magdalena Medio, donde imperan los paramilitares, apunta Sierra, los periodistas están más sometidos a presiones y su trabajo se ve más limitado y a menudo, están completamente amordazados o sujetos a los dictámenes del grupo irregular de turno. Para los periodistas de las redacciones centrales de los medios nacionales, los problemas son distintos. En muchos sitios desplazarse depende del permiso que otorguen los autores armados, como ocurre en numerosas regiones del sur del país, donde sin autorización de las FARC no se puede viajar por río. Retenes y controles en las vías son frecuentes. Pero, sin duda, los mayores peligros y las peores presiones las sufren los periodistas regionales que trabajan para medios locales. Ellos son los que están en el ojo del huracán, y muchos han pagado con la vida o el exilio el intento de un cubrimiento independiente. A la vez, problemas de falta de capacitación, de toma de partido, de excesiva proximidad a las fuentes armadas oficiales o ilegales, que se presentan en la práctica periodística, potencian los riesgos. El aspecto, pues, es infinitamente más complejo que un simple problema de seguridad”.

La corrupción, además del conflicto, ha sido señalada como uno de los principales violadores de la libertad de expresión. En lo local, según la Corporación Transparencia por Colombia, en su análisis anual sobre los índices de integridad de los gobiernos se advierte que el 51 por ciento de las entidades departamentales se encuentra en un muy alto nivel de riesgo frente a la corrupción.

La situación sin embargo no es igual para los periodistas extranjeros, para quienes las dificultades son especialmente de movilidad, por el peligro que corren de ser retenidos en los territorios bajo el control de las FARC. En Colombia los lugares que representan un mayor peligro para los corresponsales extranjeros son la Sierra Nevada de Santa Marta en el departamento del Magdalena; el Catatumbo en Norte de Santander; el corredor hacia el Urabá Antioqueño en Antioquia, todo el departamento del Chocó y el departamento de Nariño, controlado por los paramilitares en la Costa y por las FARC en los cauces de los ríos; La Serranía de San Lucas en el Magdalena Medio; el Cañón de las Hermosas en el Tolima; los

Montes de María en Bolívar; La Serranía del Perijá entre los departamentos de la Guajira y Cesar; Tame, Saravena, Fortul, Cravo y Puerto Rondón en Arauca; el Caquetá y el Putumayo, lugares a los que es imposible llegar sin el permiso previo de las FARC. En el Huila, la columna Teofilo Forero de las FARC ha dado a sus hombres la directriz de retener a cualquier periodista extranjero.

Las regiones de frontera también representan dificultades para el desplazamiento de todos los periodistas, sean locales o extranjeros. En la frontera con Venezuela son los sitios de Monte Lara y la Majayura en la Guajira, por la presencia de los paramilitares, la provincia de Cubará entre Norte de Santander y Arauca; Tibú, La Gabarra, la provincia de Ocaña en Norte de Santander y además los municipios que van de Arauca a Arauquita y a Saravena en Arauca.

En el sector fronterizo con Panamá, los riesgos se dan en Juradó en el pacífico chocoano por el dominio de las FARC y en Cabo Tiburón, Zipasurro y Capurganá en el atlántico chocoano por la presencia de los paramilitares.

En la frontera con Ecuador, los periodistas no advierten mayores dificultades a pesar de la presencia de los actores armados en los municipios de Ipiales, Cumbal y Guachucal, zonas de alta producción de amapola. Pero sí hay dificultades en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, pues el sector se ha convertido en refugio de paramilitares, guerrilleros y de delincuencia organizada. El puente internacional de San Miguel está desprotegido y libre para todo lo que pueda entrar y salir: armas y cocaína.

En Tabatinga y Benjamín Herrera, dos poblaciones del Brasil, en la frontera con Amazonas, existen pequeños carteles de narcotraficantes, con los consecuentes riesgos que implica su presencia en esa zona.

Todo permite concluir que la libertad de prensa en Colombia está amenazada de muerte y la resistencia, como estrategia de supervivencia, no es suficiente. Hacen falta políticas de prevención, garantías para el libre ejercicio periodístico, protección y capacitación. Hacen falta medios de comunicación fuertes en lo económico, para blindar la independencia. Pero también medios independientes de los actores armados, para evitar las violaciones de las que son víctimas los periodistas.

Casi todos los departamentos de Colombia registraron asesinatos de periodistas entre los años 1993-2004. De 105 periodistas asesinados, 54 lo fueron por razones del ejercicio profesional; 16 casos aún están por establecer sus motivos y los 35 restantes por razones diversas. De aquellos 53 profesionales muertos, ocho fueron asesinados en el Valle del Cauca; siete en Santander; cuatro en Arauca, cuatro en Bogotá; cuatro en el Huila y cuatro en el Magdalena; tres en el Tolima; dos en Quindío; dos en Sucre; tres en el Cesar; dos en Putumayo; dos en Nariño y dos en Norte de Santander; uno en Atlántico; uno en Cauca; uno en Bolívar; uno en Caquetá; uno en Caldas y uno en la Guajira y uno en Antioquia.

Es importante tener en cuenta que cuando se desarrolló esta investigación el gobierno del Presidente **Álvaro Uribe** adelantaba un complejo proceso de negociación con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),

que continúa hoy. El país está en medio de la discusión de un proyecto de ley que debe definir las dosis de verdad, justicia y reparación que acompañarán la eventual desmovilización de las AUC (ya han desmovilizado cerca de 4.500 hombres), y está en la mira de la comunidad internacional, preocupada por que el proceso se lleve a cabo sin impunidad.

La extradición a Estados Unidos de un muy buscado guerrillero, alias **Simón Trinidad**, ha alejado por ahora toda posibilidad de un intercambio humanitario de guerrilleros de las FARC presos por cerca de 60 políticos y militares que esa guerrilla mantiene en su poder. Una mediación para lograr ese intercambio, venía siendo intentada, con altibajos, por la Iglesia Católica. Una fuerte ofensiva lanzada por el gobierno en el sur del país bajo el nombre de Plan Patriota, confirma que la principal y casi exclusiva estrategia del gobierno es buscar la derrota militar de las FARC. Con el ELN, la guerrilla castrista, han fracasado dos intentos de aproximación durante el pasado gobierno y el actual. Hoy, un mediador mexicano intenta concretar las condiciones en las cuales emisarios del gobierno y del Comando Central de esa guerrilla, podrían sentarse a dialogar.

En general, las perspectivas de diálogo y negociación con los grupos irregulares de izquierda no son alentadoras y lo más probable es que el conflicto, tal como se ha escalado desde mediados de los años noventa, continúe haciéndolo, con las consecuentes implicaciones para el ejercicio del periodismo en Colombia. □



# I

## Región Norte

Departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre con sus principales municipios y la frontera con Panamá y Venezuela

**M**ás que amenazas directas contra los periodistas, lo que caracteriza el ejercicio del periodismo en la región Caribe colombiana, o costa, es una autocensura de ciertos temas que sobre los grupos paramilitares, la corrupción política-administrativa y con mafias de las drogas.

“También es difícil informar sobre las operaciones que realiza el ejército y lo que ocurre en Magdalena, Cesar, La Guajira y Córdoba, por el dominio paramilitar que crece. Zonas difíciles son la Sierra Nevada de Santa Marta en el Magdalena, el sur de Bolívar y muy en especial la subregión de los Montes de María, que comparten Bolívar y Sucre. La zona de La Mojana de Sucre también es difícil por lo apartada”, afirma el corresponsal de *El Tiempo* en la costa atlántica, **Rafael Salcedo**.

“La región Caribe es una de las más pobres del país, pese a su enorme riqueza en hidrocarburos y a poseer un gran potencial turístico que no sólo consiste en playas extraordinarias, sino también bellas ciudades históricas y paisajes que van, desde el nivel del mar, hasta zonas con clima frío y templado de la Sierra Nevada de Santa Marta”, agrega el profesional.

En la región, los periodistas no sólo temen por sus vidas debido a la inseguridad que fomenta la impunidad, sino que se ha llegado a tal grado de corrupción, que ha vuelto tristemente célebre a la costa y sinónimo de toda suerte de traperías.

La pobreza unida a los bajos salarios que se pagan en casi todos los medios de comunicación de la zona ha empujado a muchos periodistas a negociar la información para conservar sus puestos. Hay ciudades donde es posible encontrar reporteros que están en la nómina de pago de gobernadores, alcaldes e instituciones públicas. El reparto de la “torta” publicitaria, tanto en el sector público como en el privado, se hace agradeciendo a quienes “son amigos”.

La costa, además, ha terminado por ser un fortín de los grupos paramilitares de extrema derecha que volvieron aún más insegura la situación de la prensa independiente y reforzaron la autocensura que existe en la región. Hay pistoleros en las barriadas pobres que matan por sumas irrisorias y todo el mundo lo sabe.

Víctimas de esa situación vigente en la región norte, han sido once periodistas asesinados como represalias a su ejercicio profesional. Han muerto así en los últimos 11 años: **Francisco Castro Menco** (8 de noviembre de 1997) y **Rodolfo Julio Torres** (21 de octubre de 1999) en Sucre; **Amparo Leonor Jiménez** (11 de agosto de 1998) y **Guzmán Quintero Torres** (16 de septiembre de 1999) en el César; **Freddy Elles Ahumada** (18 de marzo de 1997) en Bolívar; **Carlos Lajud Catalán** (19 de marzo de 1993) en Atlántico; **Hernando Rangel** (11 de abril de 1999), **Gustavo Ruiz Cantillo** (15 de noviembre de 2000), **Alvaro Alonso Escobar** (23 de diciembre de 2001) y **Jaime Alberto Madero** (20 de septiembre de 2004) en Magdalena; **Jaime Rengifo Revero** (29 de abril de 2003) en la Guajira.

La corresponsal del periódico *El Heraldo* en la Guajira **Catherine Bolaños**, explica que los problemas para los periodistas son de movilidad en la parte alta de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en los municipios de San Juan, Distracción, Hato Nuevo y Villanueva; y en la Serranía del Perijá en el municipio

de Barrancas. “Ir es encontrarse con lo desconocido. Ni siquiera hay movilización vehicular. Circula la versión que hay 38 muertos en las estribaciones de la Sierra y es imposible confirmarlo. No se puede ir. Tampoco existe información oficial. Hay aquí permanente enfrentamiento entre las AUC y la guerrilla”.

Otro sitio que ha empezado a recuperarse pero estuvo vedado para los periodistas es Bahía Portete, en donde los paramilitares en abril de 2004 masacraron a indígenas Wayuu. También hay riesgos en la frontera con Venezuela, zona de la Guajira norte, por la presencia de los paramilitares.

En la parte urbana, afirma Bolaños, “en las ciudades de Maicao y Riohacha, la situación de riesgo está dada por las peleas entre bandas de delincuencia organizada, relacionadas con la guerrilla urbana y los paramilitares”. Estas bandas, que manejan el negocio del contrabando de licores, gasolinas y armas, fueron denunciadas por el director del programa Periodistas en Acción, **Jaime Rengifo Revero**, asesinado el 29 de abril de 2003.

### Prohibida la entrada

En el Magdalena, la situación para la prensa es crítica en casi todo el departamento, en especial si se pretende cubrir el conflicto entre guerrilla y paramilitares. Está vedado el ingreso de periodistas a la zona del sur del departamento, bajo dominio de paramilitares, como las riberas del río Magdalena.

Un periodista local señala que con la llegada del batallón de Alta Montaña del ejército a la Sierra Nevada de Santa Marta, las FARC se han desplazado hacia la zona de El Mameí, Perico Aguao y Palomino, donde en fecha reciente, los periodistas reportaron por lo menos 40 muertos.

La autocensura es creciente en esta zona. Los periodistas se abstienen de informar, por lo que es difícil detectar nuevas amenazas. Ya no hay cubrimientos en la Sierra Nevada de Santa Marta por el dominio de los paramilitares en la zona norte en Aracataca y Fundación; y de la guerrilla en la zona alta de Fundación.

Un periodista de la región explica que si en el pasado hubo una campaña de exterminio contra los reporteros liderada por el narcotráfico, ahora “hay alianzas perversas y diabólicas conformadas por paramilitares y políticos corruptos”, estos últimos protegidos por los primeros. Hoy no hay libertad de prensa en Santa Marta y el Departamento del Magdalena. El temor a la represalia, a las amenazas, a las famosas declaratorias de “objetivos militares” y a la muerte misma, recorren las salas de redacción, las cabinas de locución y los espacios radiales, y todos aquellos sitios que impliquen expresión y comunicación.

“La clase política corrupta llevada a las más altas dignidades que les depara la democracia, se han servido del paramilitarismo no sólo para acceder a los cargos de elección popular, sino que además, la aprovechan para eliminar enemigos políticos, para acallar voces y plumas que los acusan de la depredación de los recursos públicos. Ya no hay lugar a controversias ni rectificaciones. Ahora sólo se aplica la ley sumaria por la vía de la ejecución. Pero lo más aberrante es que sean

las propias autoridades las que de alguna manera inciten a los grupos armados a atentar contra los periodistas y la prensa”, concluye el informante que pidió no revelar su identidad.

En enero del 2005, el gobernador del Magdalena, **Trinmo Luna Corre**, acompañado del comandante de la policía, **Oscar Gamboa**, del director de fiscalía, **Alfonso Giraldo Saavedra**, y del director del CTI **Juan Carlos Pinzón**, convocaron a un desayuno de trabajo con los reporteros para hacer notar lo que ellos consideran “buenos resultados” en materia de seguridad ciudadana.

La sorpresa fue mayúscula cuando el propio coronel Gamboa, apoyado en sus expresiones por el gobernador, arremetió contra los periodistas, culpándolos de ser responsables del estado de inseguridad y de la ola de crímenes que azota a Santa Marta. Supuestamente consideró que esas noticias debían ocultarse e informar acerca de cualquiera otra cosa a la ciudadanía.

*Hoy-Diario del Magdalena* editorializó al día siguiente “Los responsables son otros”, y dio sobradas razones. Suficiente para que el periódico fuese vetado por la policía, originando una reunión de la alta oficialidad policial que tuvo como resultado el exilio de su director, el abogado y periodista **Ulilo Acevedo Silva**.

El Magdalena ha registrado una alta cuota de periodistas asesinados en los últimos once años: **Hernando Rangel Moreno**, director de los periódicos locales *Sur* y *Magdalena 30 días*, (11 de abril de 1999, después de denunciar la rampante corrupción local y promover un paro contra el alcalde de entonces, **Fidias Zeider Ospino**; **Gustavo Ruiz Cantillo**, de Radio Galeón (15 de noviembre de 2000, por denunciar a los paramilitares); **Alvaro Alonso Escobar**, propietario y director del semanario *Ragión de Fundación*, (23 de diciembre de 2001, después de denunciar la corrupción y cobro irregular de impuestos y el excesivo salario de la alcaldesa); y **Jaime Alberto Madero**, suplementero en la plaza de Santa Marta, (20 de septiembre de 2004, asesinado por los paramilitares por vender la edición del periódico *El Informador*, donde se daba cuenta de la captura de uno de ellos).

En Atlántico, hay una paz disfrazada, afirma el periodista **Juan Alejandro Tapias**, de *El Heraldo*, y explica que “algunas zonas del sur del departamento, como Santa Lucía y Manatí, tienen presencia de grupos armados que llegan por el corredor del corregimiento de Palermo en Sitio Nuevo, una población del departamento del Magdalena”. Pero advierte que las amenazas contra la libertad de prensa, por lo menos de las que él ha sido víctima, tienen otros autores. “Recibí una llamada diciéndome que me cuidara, que dejara quieto el tema sobre el mercado de Barranquilla, donde una serie de grupos de organizaciones de vigilancia particular, al que llaman los Paraquitos, con el pretexto de limpiar el lugar de delincuentes, ha empezado a extorsionar y cobrar vacunas”, señala.

En Barranquilla, la capital del Atlántico, algunos barrios del sur, de la periferia, como La Chinita, la Luz, Las Nieves y El Ferry, representan también algún riesgo para la movilización de los periodistas por la presencia de bandas y pandillas delincuenciales. “Se dice que el que esté despierto allí después de las once de la noche, lo matan”, comenta Tapias.

Aquí las principales amenazas a la prensa provienen del sector político. Es conocido

el caso de **Carlos Lajud Catalán**, director de emisoras ABC, asesinado el 19 de marzo de 1993 en Barranquilla, después de denunciar irregularidades en un contrato de privatización de las empresas de teléfonos.

**Rafael Sarmiento Coley**, editor político de *El Herald*, advierte que hay problemas para el ejercicio del periodismo en algunos municipios del Atlántico. A **Giovanni Alvarez**, de la emisora Provincia Stereo, de Sabanalarga, le quemaron la estación radial por denunciar la corrupción; a **Manuel Pérez Fruto** le intentaron incendiar la casa y le robaron equipos en Santo Tomás, a propósito de una denuncia contra el alcalde publicada en el diario *La Libertad*. En Baranoa, los periodistas están atemorizados ante las amenazas, por cuanto los paramilitares les tienen prohibido informar sobre cualquier actividad del Polo Democrático.

En Cesar, los periodistas no olvidan los asesinatos de **Amparo Leonor Jiménez**, corresponsal de los noticieros de TV En Vivo y Q.A.P., y coordinadora de Redepaz, asesinada el 16 de septiembre de 1999, luego de denunciar el desalojo de 150 familias de campesinos de una hacienda de supuesta propiedad del ex congresista **Carlos Arturo Marulanda**; ni el de **Guzmán Quintero Torres**, jefe de redacción del diario *El Pilón* de Valledupar, quien denunció los excesos del ejército en las poblaciones de Patillal y Río Seco.

En Valledupar, los periodistas de *Vanguardia Liberal* se sienten afectados por las obstrucciones provenientes de miembros de las Fuerzas Armadas, y por las amenazas de los paramilitares en contra del colega **Richard Leguizamo**, a quien responsabilizaron de una información sobre la muerte del líder indígena, **Fredy Arias**, de la zona de Ataques.

**Agustín Bustamante**, periodista de *Vanguardia Liberal* en Valledupar, afirma que la zona de Atanques, Patillal y Badillo, hacia el norte del Cesar en límites con la Sierra Nevada de Santa Marta, son lugares de difícil acceso para la prensa, por la presencia de las FARC, “aunque también hay presiones de la Fuerza Pública”.

## No publicar

La jefe de redacción del diario *El Pilón*, **Ana María Ferrer**, explica que desde hace 3 a 4 años, los medios de comunicación del Cesar “optamos por la autorregulación. Uno mismo al ver que no había garantías, tenía que adoptar las medidas. Así, muchos medios decidieron no cubrir algunos hechos, y no publicar comunicados de los grupos armados sin mencionar sus nombres. No hacerle el juego a la guerra. En el 2001, los ‘paras’ nos dijeron que no publicásemos más muertos, porque más muertos será lo que viene. Entonces *El Pilón* publicó un editorial anunciando aquella posición frente a los comunicados de los grupos armados y advirtiendo que no aceptaríamos más sus citaciones”.

En el Cesar, otras zonas de riesgo para los periodistas son los corregimientos que en jurisdicción del Cesar van a la Sierra Nevada de Santa Marta como Patillal, Atanques, Guatapurí, Chemesquemena, Villa Germania, La Mesa, por la presencia de ambos grupos, quienes evitan la entrada de los periodistas a través de retenes.

En el departamento de Bolívar, el subdirector del diario *El Universal*, **Germán Mendoza**, identifica como sectores de riesgo, la zona sur, hacia Magangue, San Pablo, Simití, Pinillo y Río Viejo, donde confluyen ambos actores armados en una disputa por las minas de oro, en poder de las AUC. El desplazamiento sólo puede hacerse con las Fuerzas Armadas, lo que constituye un riesgo adicional, además de las implicaciones que tiene para la independencia periodística. En la zona norte, los peligros se presentan en el corregimiento El Salado, en el Carmen de Bolívar.

Otros frentes informativos que representan riesgos al cubrirlos son el político y el de las apuestas. En la radio regional el problema es que no hay un salario que garantice la independencia. “Los periodistas trabajan con un cupo publicitario, lo que les permite romper esa línea entre la profesión y las ventas”, dice Mendoza

En Cartagena, hay sectores de difícil movilidad por la presencia de pandillas y delincuencia organizada a tal punto que en barrios como Nelson Mandela y El Pozón, a partir de las 10 de la noche no entra ni la policía.

Mendoza advierte que lo mejor que puede hacer un periodista que llega al departamento es contactar al medio de comunicación local, a la Iglesia y a la Defensoría del Pueblo. Las amenazas son generales: un comunicado anónimo, una llamada telefónica, una discrepancia sobre el uso del lenguaje. “Quieren convertirnos en vehículos de relaciones públicas. En cuanto a la información pública, lo que enfrentamos es una incapacidad para obtener y ofrecer toda la información por las dificultades de desplazamiento. La autocensura se da en términos de prudencia”, concluye Mendoza.

Una periodista del departamento de Bolívar, que solicitó reserva de su identidad, relató cómo en enero de 2003, días previos a la elección de alcalde de Soplaviento, el equipo de trabajo de *El Universal*, compuesto por la reportera, un fotógrafo y el conductor del vehículo, vivieron una delicada situación camino a ese municipio del norte de Bolívar, al que viajaron para conocer los detalles de la organización electoral.

“En la zona, según las autoridades, actúan la guerrilla (en la parte rural) y las autodefensas (en la parte urbana). En el casco urbano del municipio de San Estanislao de Kostka (conocido también como Arenal), a orillas del canal del Dique, el fotógrafo y yo le dijimos al chofer que permaneciera junto al vehículo, mientras en una canoa atravesábamos el canal para llegar al municipio de Soplaviento, en la otra orilla. Dos hombres se le acercaron para preguntarle qué hacía allí y le lanzaron muchas preguntas, queriendo saber si él trabajaba para unas personas que supuestamente irían a ese lugar a comprar ganado”, recuerda la periodista.

“En Soplaviento sentimos que varias personas nos vigilaban todo el tiempo. Al regresar al vehículo, decidimos salir rápidamente hacia Cartagena. Entonces dos motociclistas nos siguieron por un par de kilómetros, hasta donde vimos que había junto a la carretera, cuatro hombres vestidos de civil, dos a cada lado. Pensamos que nos iban a detener, pero uno de ellos nos saludó y nos hizo señas de que siguiéramos. Al parecer nos reconoció como periodistas.

“Sentimos que ellos eran la autoridad allí y aunque nunca se indenticaron como pertenecientes a ningún grupo o como guardaespaldas de alguien, por las versiones que se oyen pero que nadie sustenta, deducimos que eran paramilitares”.

“Córdoba convive con ellos y nosotros no somos la excepción”. La frase es de **William Salleg**, director de los periódicos *Meridiano*, de Córdoba y de Sucre. La dice cuando se le menciona a los paramilitares. Para Salleg, quien reconoce que su apuesta no es por la neutralidad ni por la objetividad periodística, sino por la seguridad de la región, el problema de su departamento no son las AUC. “Contrario a lo que la gente cree, el riesgo para los periodistas, viene del sector político”, afirma.

Advierte que en Córdoba se vive un fenómeno de creciente autocensura. “Aquí hay que estar en la derecha o en la izquierda, tomar partido. Puede venir y movilizarse cualquier periodista. El problema es la pregunta que haga, si tratas de averiguar más allá, te dirán que no publiques eso, y que si lo publicas, te tienes que ir”. La intromisión de las AUC en el periódico, dice Salleg, es sutil. “Sencillamente nos comentan su desacuerdo con la forma de titular. Si mataron a cuatro, es mejor no usar la palabra masacre”.

Esta posición, contraria a la independencia periodística, la comparte **Gina Morelo**, jefe de redacción del *Meridiano de Córdoba*: “Hay autocensura. Eso es una realidad. Las presiones no son directas. Hemos tenido la experiencia de estar investigando casos de corrupción, como el de un alcalde local y un centro de salud, que nada tenían que ver con las AUC, y los periodistas fueron amedrentados a nombre de los paramilitares”. Para Morelo las zonas más delicadas son las del Alto Sinú.

En Córdoba en los dos últimos años, periodistas de diversos medios, en especial de radio RCN, revelaron haber sido víctimas de presiones por parte de los paramilitares durante las negociaciones con el gobierno nacional, en Santa Fe de Ralito. Las presiones se referían a exigir a los periodistas revisar las informaciones que enviarían a Bogotá, antes de ser emitidas.

En Sucre, dice Salleg, la situación es distinta. “Nosotros somos más arriesgados, apoyamos al ejército y a las autoridades en la lucha contra la guerrilla. Un periodista del *Meridiano* no puede identificarse como tal, frente a la guerrilla, que sabe cuál es la tendencia del periódico”.

La jefe de redacción del *Meridiano* de Sucre, en Sincelejo, **Elsa Peniche**, opina que la zona Morroa-Sincé y la sabana hacia Corozal, San Juan de Betulia, Galeras, resulta complicada topográficamente, además por la presencia de las FARC. También la región de Los Montes de María, ubicados entre el departamento de Bolívar hacia Sincé, Chengue y Oveja en Sucre, dice Peniche. “Es una zona estigmatizada, porque durante años fue zona de conflicto por la presencia de las FARC, pero debido al regreso de la fuerza pública a ese sector, es mucho más fácil movilizarse y no conozco de colegas amenazados. Incluso ya no hay retenes”.

En Sucre, en los últimos 11 años, fueron asesinados dos periodistas: **Francisco Castro Menco**, de radio Majagual y representante de los campesinos, (8 de noviembre de 1997 en Majagual, luego de recibir amenazas de paramilitares para que dejara de defender a los campesinos y de denunciar las violaciones de las AUC a los derechos humanos). Y **Rodolfo Julio Torres**, de radio Caracol y del periódico *El Meridiano*, (21 de octubre de 1999, por sus denuncias contra la corrupción administrativa y en contra de los paramilitares). Los asesinos dejaron en su cuerpo inerte la frase: “Por sapo, por auxiliador de la guerrilla del ELN”. □



# II

## Región Andina o Central

Departamentos de Norte de Santander, Antioquia,  
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas,  
Risaralda, Quindío y la frontera con Ecuador

**A** pesar de la desmovilización de 1.425 paramilitares en la región del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, la situación de orden público representa serios riesgos para el ejercicio periodístico, especialmente porque con la salida de los paramilitares, las guerrillas de las FARC y el ELN, que habían sido desplazadas hacia la frontera con Venezuela, pueden iniciar su retorno.

En este departamento hay una alianza entre paramilitares y narcotraficantes, que desde hace algunos años empezaron a financiar campañas electorales, al punto que el alcalde de Cúcuta, **Ramiro Suárez Corzo**, se encuentra detenido por sus vínculos con los paramilitares y la fiscal **Ana María Flores** está prófuga de la justicia (*El Tiempo*, Editorial del 10 de diciembre de 2004).

El departamento está sembrado en aproximadamente 15 mil hectáreas de coca. Proliferan los negocios clandestinos de gasolina y armas en la frontera con Venezuela. El robo de automóviles y las construcciones ilegales son noticias de primera plana en el diario *La Opinión*.

**Angel Romero**, jefe de redacción de *La Opinión* de Cúcuta explica que además de los riesgos que plantean los actores armados y la corrupción, la situación más complicada es la de la formación de los periodistas. “Hay problemas éticos, se adjetiva, se presentan informaciones sin confrontar, se publican rumores”.

Los funcionarios públicos y los mandos militares y policiales no aceptan las críticas, ni que les soliciten cierta información, o les pidan rendición de cuentas sobre determinados asuntos. Más bien, quieren una prensa al servicio de la información oficial. “Hace algunas semanas hubo una explosión. Todos sabíamos que era una bomba, pero el comandante de policía insistió que fue una explosión de pólvora. Nada más se dijo”, comentó otro periodista, y agregó que “el libre ejercicio del periodismo es difícil y arriesgado en esta zona de frontera, donde coinciden y se enfrentan diferentes actores armados e ilegales: guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas, delincuencia común, traficantes de armas, etc. Es evidente en la región la alianza entre algunos sectores políticos y gubernamentales con los grupos paramilitares. Es muy alto también el grado de corrupción en los niveles públicos y oficiales”.

El contrabando de gasolina, por ejemplo, es controlado por los paramilitares, y pese a las denuncias de varias entidades no gubernamentales, estos paramilitares controlan la política y los gobiernos en por lo menos 20 municipios de Norte de Santander. Los casos de corrupción en los organismos de policía, de seguridad y judiciales son alarmantes.

Las amenazas y ataques – abiertas o disimuladas – al libre ejercicio del periodismo son una constante. Por eso, la profesión se ejerce con miedos y temores. Muchos reporteros prefieren no ocuparse de temas que consideran “calientes y peligrosos”.

A esta región primero llegaron las guerrillas del ELN y del EPL, luego las de la FARC y a partir de 1999 están los paramilitares. Los periodistas han estado siempre en el centro de esta guerra sin más armas que sus grabadoras, cámaras o libretas de apuntes. Muchos reporteros recuerdan que las situaciones más difíciles se vivieron

cuando las FARC tuvieron el control territorial de la región. Hasta sus domicilios les llevaban los comunicados o “partes de guerra”, con la advertencia de que “el jefe se los manda para que lo publique”.

## Las amenazas

La guerra de El Catatumbo, región productora de coca, ha tenido sus repercusiones en Cúcuta y su área metropolitana. Se lucha por el control de los cultivos ilícitos y el negocio del narcotráfico.

En *La Opinión*, los periodistas reciben constantes amenazas desde distintos frentes, por lo que se publica o por lo que se deja de publicar. Y no sólo provienen de grupos armados y al margen de la ley, sino de políticos y funcionarios.

“Todos allá conocen que en la radio se registra un sistema peligroso y muy complicado: los funcionarios y los políticos financian los programas de muchos locutores o seudo periodistas, y éstos sin ningún control ni responsabilidad, se dedican a insultar, a calumniar y a agredir a las personas o entidades que los patrocinadores les indican. En algunos de esos espacios radiales, quienes intervienen no son profesionales de la prensa, sino políticos, ex candidatos a la alcaldía o a corporaciones públicas, ex concejales, diputados en ejercicio. Muchos de los que hacen esos programas tienen antecedentes judiciales, denuncias penales y criminales por receptación de vehículos, estafas, abuso de confianza y hasta los hay con acusaciones de homicidio”, relata Romero.

En Cúcuta hay muchos barrios que resultan peligrosos para los periodistas. En el Norte de Santander son considerados municipios de alto riesgo o zonas rojas: Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí, Teorama, Tibú, Ocaña, El Carmen, Puerto Santander, Villa del Rosario - Juan Frío.

Otro periodista expresó que “a raíz de la desmovilización y entrega de las armas de 1.425 combatientes de las AUC que operaban en esta zona de frontera, por lo menos 300 regresaron a Cúcuta. Pocos días después de la movilización ya habían matado a por lo menos seis desmovilizados, entre éstos cuatro jefes de esa organización en Cúcuta, El Zulia, Villa del Rosario y Los Patios.

Los desmovilizados responsabilizan de estas muertes violentas a la guerrilla, pero otras fuentes señalan que se trata de “ajustes de cuentas” entre los mismos “paras”. Varias entidades y dirigentes de la región habían llamado la atención y expresado sus temores que se desatara una vendetta o retaliación a raíz de la desmovilización y entrega de las armas. De todas maneras, este es un nuevo factor de perturbación y de zozobra para el libre ejercicio del periodismo en esta convulsionada zona de frontera.

En el departamento de Norte de Santander en los últimos 11 años fueron asesinados el director y propietario del periódico *La Opinión*, **José Eustorgio Colmenares** (12 de marzo de 1993, en Cúcuta, según parece por el ELN debido a las denuncias que realizó en su contra); **Jesús Medina Parra**, de radio Punto, quien recibió amenazas por sus denuncias contra la corrupción estatal. El 28 de enero de 1994, sicarios

le propinaron seis impactos de bala, cuando salía de la emisora; **Julio Hernando Palacios**, gerente de la radio Lemas y director de la radio revista *El Viento* fue muerto el 14 de enero de 2005.

El periodista **Jorge Corredor**, director del programa *El Pregón del Norte*, en radio La Voz del Norte, fue víctima de un atentado. Logró esquivar las balas, pero estas alcanzaron a su hijastra de 20 años.

El departamento del Tolima, es la tierra de **Elizabeth Obando**, la distribuidora del periódico *El Nuevo Día* de Ibagué, asesinada por el frente las FARC el 11 de julio de 2002 en la vía que Ibagué-Roncesvalles. Ella fue advertida por un guerrillero para que no distribuyera el periódico en la población, a fin de que no se conociera la denuncia de una reforma agraria de facto y el reclutamiento de menores. Las FARC la acibillaron en plena vía pública, después de hacerla descender del bus en que viajaba.

En el Tolima, la libertad de prensa ha sufrido un profundo deterioro en los últimos años. **Antonio Melo**, director del periódico *El Nuevo Día* le explica que si bien “por parte de las autoridades no hay una actitud manifiesta contra los periodistas, algunos funcionarios afectados por las denuncias han utilizado el mecanismo de la demanda como fórmula de presión”.

El riesgo para los periodistas en el caso del Tolima está muy identificado. En el norte del departamento, los paramilitares que llegan desde el Magdalena, han sembrado el terror. Muchos periodistas han tenido que marcharse, como **Luis Alberto Castaño**, quien dirigía un noticiero en la radio comunitaria Café 93.5 FM. La emisora está al aire bajo la nueva dirección de **Freddy Rivera**, quien afirma que “la situación no es fácil”.

Hacia el sur del departamento, los periodistas aseguran que es muy difícil hacer cubrimientos en el eje San Luis, Guamo, Natagaima, que está bajo el control de los paramilitares, y en menos aún en Cajamarca.

La gran mayoría de las amenazas en este departamento se dan por la vía de las llamadas telefónicas y la distribución de panfletos. Para amedrentar a los periodistas, las FARC utilizan a veces su publicación Resistencia, y las AUC su correo electrónico.

Las amenazas de las AUC han golpeado al ex director de la emisora Café Stereo, de Líbano, **Luis Alberto Castaño**; al director de la RCN radio, en Honda; y a **Pedro Cárdenas**, quien fuera secuestrado y estuviera exiliado en Uruguay.

Melo explica que no hay autocensura en el periódico pero que han decidido no viajar a determinados lugares, como Roncesvalles. La autocensura por el contrario es común en las emisoras y otros periódicos locales, todos también afectados por la suspensión de la pauta publicitaria gubernamental y empresarial del Tolima. Al igual que en otras regiones del país, con esa pauta oficial se premia o se castiga a los periodistas. Para enfrentar las dificultades, los medios de prensa de la región han dejado de lado las rencillas locales y bajo el lema “La Unión revive al Tolima”, cumplen tareas comunes.

“No existen garantías totales. Los periodistas que vengan y corran riesgos deben

acudir a sus propios colegas, a la más reciente cúpula de la policía y a la defensoría del Pueblo”, recomienda Melo

En el Tolima en estos once años, fueron asesinados: **Pablo Emilio Parra Castañeda**, gerente de radios comunitarias del municipio de Planadas (27 de junio de 2001, por las FARC, que lo acusó de “torcido”); **Arquímedes Arias**, pionero de la radio comunitaria del departamento con las emisoras Fresno (24 de julio de 2001, luego de sus denuncias contra la corrupción administrativa); y la ya citada **Elizabeth Obando** (11 de julio de 2002, por las FARC).

Para el corresponsal de *El Tiempo*, **Luis Francisco Arias**, el eje cafetero parece una zona tranquila para el ejercicio del periodismo. No se conoce de amenazas o vetos expresos a ningún comunicador de esta región comprendida por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, aunque en Manizales ocurrió el 30 de enero del 2002, uno de los casos más graves contra la prensa en la historia contemporánea de Colombia, con el asesinato del subdirector de *La Patria*, **Orlando Sierra Hernández**. Allí se considera de que se trató de un hecho aislado, como consecuencia del abierto enfrentamiento de Sierra, a través de su columna ‘Punto de Encuentro’, con la coalición política de Caldas, a la cual se acusa de ser la presunta autora intelectual del homicidio.

No hay por esta zona riesgo inminente para los periodistas, pero es recomendable transitar con cuidado. En Risaralda, los municipios de Pueblo Rico, Mistrató y Quinchía tienen una importante presencia de grupos guerrilleros. De hecho, dos reporteros de *El Tiempo*, de Bogotá, fueron secuestrados por las FARC durante tres días en zona rural de Mistrató, en agosto del 2002, pero luego liberados sin ninguna exigencia.

En el caso de Caldas, las zonas de riesgo por guerrilla y paramilitares son más amplias, pero no se sabe de situaciones en las que periodistas hayan sido víctimas de ataques o amenazas por parte de dichos grupos. Aquí, el director de *La Patria*, **Nicolás Restrepo**, identifica como zonas de riesgo las poblaciones de Sabana y Penipuaga en límites con el departamento de Antioquia, por la presencia de cultivos de coca, de paramilitares y guerrilleros.

Y en Quindío la prensa tampoco ha registrado dificultades, pero sí hay otros fenómenos como el auge de los nuevos “capos” del narcotráfico que se han establecido en la zona. Esto quizás podría llevar a que los periodistas fueran objeto de intimidaciones, pero lo ‘espinoso’ del asunto hace que los comunicadores evadan el tema y no se ocupen de profundizar sus investigaciones al respecto, por cuanto esa indagación los conduciría a arriesgar la vida.

## Las inversiones

Tal vez la mayor intimidación proviene de grupos de delincuencia organizada, conforman el aparato militar del narcotráfico. A Pereira ha llegado a asentarse una buena parte del narcotráfico que huye de la persecución oficial en el norte del Valle, donde tienen grandes inversiones en compras de tierras, han permeado gran parte

de la actividad comercial (como fachada) y en alguna medida al sector político.

En Risaralda, además de esta situación con el narcotráfico, que según la jefe de redacción del diario *El Otún*, **Marta Lucia Monsalve**, pareciera que vive un nuevo *boom*, la verdadera amenaza a los periodistas se da por la utilización que de ellos quieren hacer los actores del conflicto y las autoridades. “Muchas veces, la imprecisión de la versión oficial, en su afán por mostrar resultados, nos obligue a recibir reclamos de los afectados con esas informaciones”, explica.

La situación antes descrita también se presenta en Armenia, con el agravante de que gran parte de las tierras cafeteras están siendo compradas por agentes del narcotráfico.

Dos periodistas han sido asesinados en el Quindío presumiblemente por sus denuncias en contra del excongresista **Carlos Alberto Oviedo Alfaro**. Son ellos **Jairo Elías Márquez**, director de la revista crítica *El Marqués* (10 de febrero de 1997) y **Ernesto Acero Cadena**, periodista radial y del periódico *El Informador del Quindío* (12 de diciembre de 1995).

El departamento de Santander, como muchos otros departamentos, está afectado por la ocupación de territorios por parte de grupos armados y su influencia en la política y la vida económica local. Es evidente que las decisiones políticas se vean alteradas por el mando paramilitar en sitios como Landázuri y Tibú. Para **Sebastián Hiller**, director de *Vanguardia Liberal*, la situación es compleja en el norte hacia Pailitas por la presencia de un reducto (bandoleros) del EPL, en Bucaramanga por la corrupción política y en el Puerto de Barrancabermeja.

El periodista **Helman Villamizar** es más contundente: “En la zona de Soto Norte, especialmente en los municipios de Tona, California, Vetas, Saratá, Matanza, El Playón y Río Negro, la situación sigue siendo muy delicada por la tradicional presencia de las FARC, y la llegada de la AUC. A pesar de que a principios del 2000, el ejército colombiano realizó la conocida operación Cóndor en contra de la columna **Arturo Ruiz**, una de las más importantes operaciones militares, yo no me atrevo a subir...”

En el sur de Santander, los municipios más afectados son Vélez, Sucre y Barbosa en la zona limítrofe con Boyacá donde además los clanes familiares del narcotráfico han logrado el silencio de los periodistas.

“Uno aprende a calibrar el horizonte de las informaciones. Prefiero ahora contar historias de vida”, concluye Villamizar.

**Nancy Rodríguez**, jefe de redacción de *Vanguardia Liberal* dice que hay presiones soterradas. “No es la amenaza como tal. Son presiones, en especial las que provienen de las fuentes oficiales”, afirma.

En los últimos años, las intimidaciones se han hecho más frecuentes contra los periodistas en el puerto de Barrancabermeja. Contundente fue el incidente que vivió la periodista de *Vanguardia Liberal*, **Beatriz Elena Mantilla**, a quien el coronel **Ricardo Bernal** la declaró persona non grata en el batallón Nueva Granada, a su mando, advirtiéndole que “voy a encargarme de que los organismos de seguridad del Estado sepan qué clase de persona es usted”. Bernal estaba en desacuerdo con

la publicación de una nota sobre la muerte accidental de un soldado el mismo día de la visita en la región del Presidente de la República, **Álvaro Uribe**.

Pero las intimidaciones no solo provienen de la fuerza pública, en este puerto petrolero donde han hecho presencia todas las organizaciones guerrilleras en los últimos 30 años y las Autodefensas Unidas de Colombia en los últimos cinco. La situación para los periodistas es similar a otras regiones: dificultades de movilización, presiones para condicionar las informaciones y amenazas de muerte.

En sus últimos informes, la SIP denunció las amenazas de paramilitares de las que fueron víctimas **Angela Muñoz**, propietaria del semanario *El Vocero*, y **Jeanneth Ojeda**, propietaria del semanario *La Noticia*. En enero de 2004, la presentadora de televisión **Inés Peña**, fue secuestrada, amenazada y torturada debido a sus denuncias de que los paramilitares estarían reclutando a la juventud del puerto.

Santander tiene una de las más altas cifras de periodistas asesinados en los últimos 11 años: **Gildardo Ariza Olarte**, de la emisora Ondas del Carare (19 de abril de 1995, en el municipio de Vélez, por la guerrilla de las FARC, luego que denunciara la extorsión de la que eran víctimas los campesinos de la zona); **Luis Alberto Rincón** y **Alberto Sánchez Tovar**, de la televisión local (28 de noviembre de 1999, cuando los paramilitares quisieron recuperar las imágenes que habían grabado de una fiesta); **Fabio Leonardo Restrepo** y **John Jairo Restrepo**, presentador y camarógrafo de un canal local de Barrancabermeja (el 6 de febrero de 2000, en Girón, junto a un cabecilla del EPL, mientras cubrían un enfrentamiento con los milicianos); **Mario Prada Díaz**, director del semanario *Horizonte Sabanero* (12 de julio de 2002, en zona rural de Sabana de Torres, por denunciar los malos manejos que la administración de esa población estaba haciendo con los recursos públicos); y **José Emeterio Rivas**, director del programa anticorrupción las Fuerzas Vivas en radio Calor Stereo, (7 de abril de 2003). Además se registran las amenazas a **Pedro Javier Galvis**, del periódico *La Noticia*, y a **Diego Waldron** y **Garibaldi López**, de radio Calor Stereo.

## Zonas minadas

La sola mención del departamento de Antioquia recuerda la violencia sembrada por los carteles de la droga en los últimos años de la década de los 80 y comienzos de los 90. Sin embargo, los periodistas antioqueños advierten que no tienen mayores problemas para ejercer su profesión. **Clara Vélez**, del periódico *El Colombiano*, es contundente en afirmar que el problema de movilizarse por Antioquia son las zonas minadas. “Especialmente en el oriente, en las Veredas de San Francisco, San Luis, San Carlos, Cocorná y Argelia, donde hace algunos meses explotó una casa bomba dejando varios militares muertos. En estos sitios se corre el riesgo de detenerse a tomar algo en una casa y que explote. Los actores armados se dedicaron a desplazar, confinar las poblaciones y minarlas. Nadie lo lleva a uno hasta allá. Los conductores responden que ni por toda la plata del mundo, porque entrar es solo cuestión de escoger quién quieres que te pegue un tiro”, afirma Clara.

Otro sitio “vedado” es la comunidad de Paz de San José de Apartadó en el Urabá

Antioqueño. “Hay que pedir cita con dos semanas de anticipación y se la dan para dentro de tres meses”, dice otra periodista. Allí está la Corporación Jurídica Libertad y las Brigadas Internacionales de Paz, pero el mando es de las FARC. San Pedro de Urabá sigue siendo un corredor de las FARC y en el Atrato Medio, son frecuentes los retenes por el río. “De cuando en cuando escucha uno una escaramuza, un tiro al aire, que le recuerda que no está solo en este mundo”.

En el occidente antioqueño se presentan riesgos en el municipio de Dabeiba, donde en enero 2005 fue secuestrado por las FARC el reportero gráfico del diario *Urabá Hoy*, **Hernán Echeverri**.

La otra situación es la de la capital antioqueña, Medellín, que pese a que los últimos informes oficiales advierten sobre una notable disminución en las cifras de criminalidad, la realidad es otra. “A una mujer le vaciaron un revólver en la cabeza y apareció en los partes de policía como muerta en un accidente de tránsito. Pareciera que no quieren reportarlos”, denuncia un periodista radial.

El 25 de noviembre de 2003, se desmovilizaron 850 miembros de las diversas bandas delincuenciales de la ciudad agrupados en el Bloque paramilitar Cacique Nutibara, pero aún quedan demasiados reductos de bandas.

Para **Clara Vélez**, cualquier periodista que llegue a Antioquia debe contactar con el medio de comunicación local para recibir información. Y dentro de la ciudad, evitar desplazarse a los corregimientos de Santo Domingo Sabio, Santa Cruz y San Cristóbal.

Para **Adriana Vega**, editora regional de *El Tiempo* en Antioquia, las zonas más graves para el desplazamiento de periodistas son las carreteras del oriente antioqueño, la vía al Chocó, la vía entre Medellín y Urabá, las vías del norte de Urabá, las vías al norte de Antioquia y las vías al suroeste. En Turbo, son los corregimientos de El Dos y Curralao los que representan algún riesgo

La gran mayoría de periodistas asesinados en este departamento lo fueron en la década de los años 80 bajo el narcoterrorismo sembrado por los carteles de la droga. En el periodo investigado por la URR de la SIP, sólo aparece el asesinato de **María Elena Salinas**, el 5 de marzo de 2000. La periodista y profesora de la facultad de comunicación de la Universidad de Medellín, desapareció y después el ejército la reportó como una guerrillera NN, caída en combates en San Carlos, entre el ejército y la guerrilla del ELN.

En Antioquia el periodista **Luis Eduardo Gómez** de la revista *Urabá*, fue amenazado por funcionarios del municipio de Arboletes.

Según **Andrés Monpotes**, corresponsal de *El Tiempo*, en Nariño, la costa del Pacífico está bajo control paramilitar y el sur es zona frecuentada por la guerrilla. En el Bajo Putumayo, donde las FARC dinamitan casi a diario el oleoducto Transandino, los periodistas temen desplazarse.

En Nariño los paramilitares han amenazado a **Wilson Viracachá** del canal Caracol; a **Jorge Antonio Gallego**, periodista deportivo, por sus denuncias de malos manejos con el dinero del deporte; a **Francisco Terán**, director de Noticias de Todelar Radio, y en límites entre Putumayo y Nariño, en el sitio La Pastora, fue secuestrado en diciembre del 2004 el corresponsal de Caracol y su camarógrafo.

Nariño se ha convertido en uno de los más peligrosos para el ejercicio periodístico debido a que casi todo el departamento está controlado por los paramilitares en la costa y por las FARC en los cauces de los ríos.

Para el reportero que cubre municipios en el *Diario del Sur*, **Rodolfo Pantoja**, “los riesgos se presentan en las zonas de la costa Pacífico, en Tumaco, Barbacoas, Roberto Payan y la Tola, donde uno va con muchas medidas de seguridad. Hay que ir prevenido”. A nivel de la frontera con Ecuador, los periodistas dicen que la práctica profesional es normal a pesar de la presencia de los actores armados en los municipios de Ipiales, Cumbal y Guachucal, zonas de alta producción de Amapola.

Pantoja explica que en Nariño, “la libertad de prensa empezó a sentir serias amenazas hace cinco años, cuando se tuvieron que ir de la región e incluso del país, siete periodistas, varios de cuales no han podido regresar ante las amenazas de las AUC. Entre ellos, **Germán Arcos, Oscar Torres, Cristina Castro**. Hace cuatro años, el ELN secuestró al corresponsal del canal Caracol **Wilson Viracachá**. Aparte de eso hay normalidad. Lo que me preocupa es que tenemos miedo de tocar temas de orden público, hablar de los actores armados. Hay una especie de autocensura. Los casos de amenazas no se han vuelto a presentar por eso, o no se denuncian por temor a represalias. Todo el mundo habla pero nadie se atreve”.

En Nariño fueron asesinados: **Alejandro Barbosa**, director del periódico *El Caleño* (24 de octubre de 1997, por los narcotraficantes, según denuncia del gremio periodístico de Pasto); y **Flavio Bedoya Tovar**, corresponsal del semanario comunista *Voz*, por entrevistar a un jefe guerrillero y denunciar la incapacidad de la policía y la administración local (27 de abril de 2001 en Tumaco).

En Huila, han sido frecuentes los ataques a la prensa en los dos últimos años: la guerrilla voló las instalaciones de la emisora Timaná Stereo; **Diógenes Cadena**, periodista de temas judiciales de la emisora Huila Stereo tuvo que abandonar la región por las amenazas de las que fue víctima luego del asesinato del periodista **Guillermo Bravo**; **Carlos Mora Collazos**, editor del periódico *La Nación*, denunció ante la Fiscalía las amenazas que le hizo un testigo vinculado al asesinato del periodista **Nelson Carvajal**. También fueron amenazados **Norberto Antonio Castaño**, de una emisora local, a quien los paramilitares acusaron de tener nexos con la guerrilla; y **Germán Hernández**, del *Diario del Huila*, supuestamente intimidado por el comandante de la Novena Brigada.

Hernández afirma que el ejercicio del periodismo en el Huila se enfrenta a dos situaciones: la de las fuerzas del orden y la parte económica de los medios. “El ejército pretende manipular la información. Lo rotulan a uno de pertenecer a un lado o a otro... A los periodistas de la TV local y de la radio, les pagan con cupos de publicidad, lo que los hace vulnerables a quien paga la pauta, que son las entidades oficiales y las campañas de los políticos. Con los actores armados, lo que hay es manipulación, pero no hay intimidación directa. En general se portan bien. Pero con los periodistas extranjeros, sobre todo si son estadounidenses, hay una directriz clara de retenerlos”.

**Melquicedes Torres**, actual jefe de redacción de radio Súper, en Bogotá, que se ha desempeñado como corresponsal de algunos medios en el Huila, advierte que “allí se presentan varias amenazas a la libertad de prensa. Primero la dependencia económica

de los medios frente a las fuentes oficiales y al sector privado; segundo, la presión de los actores armados e incluso de la fuerza pública a través de amenazas veladas, que impiden la presencia de los periodistas en determinados sitios por parte de los primeros, y de las trabas o presiones directas del ejército; y por último, la deficiencia en la formación de los profesionales del periodismo.”

En el Huila han sido asesinados: el educador y periodista de radio Sur de Pitalito, **Nelsón Carvajal** (16 de abril de 1998, después de sus denuncias por irregularidades en la construcción de viviendas populares y su presunta relación con el tráfico de armas y estupefacientes de la zona); **Pablo Medina Motta**, camarógrafo del canal local Telegarzón (3 de diciembre de 1999, cuando se desplazaba en una moto de la Sijín (Seccional de Inteligencia Judicial Investigativa de la Policía Nacional) en momentos en que el pueblo era atacado por las FARC); **Gimbley Perdomo**, director de noticias de radio Panorámica (1 de diciembre de 2002 en Gigante, por sus denuncias contra la corrupción); y **Guillermo Bravo Vega**, del canal 2 local de Neiva (28 de abril de 2003, por sus denuncias de la corrupción en la Licorera del Huila).

Boyacá no escapa a los riesgos para el ejercicio periodístico. La profesional **Esperanza Páez**, encargada de la jefatura de redacción del semanario *Boyacá 7 días*, llegó a la región en septiembre de 2004 y se encontró con que hay zonas en el departamento a las que no se puede acceder fácilmente si no es con el visto bueno de la guerrilla. Esas zonas son: el Belén, Paz de Río, Socha, Chita, Güican, Panqueba, Chiscas, Espino, Labranza Grande, Soatá, La Uvita, Boavita en el Norte y nororiente del departamento. Un sector en límites con Santander que comprende Cobarachía, Sipacocque y San Mateo representa peligros para los periodistas. De mediano riesgo por la presencia de las FARC y algunos reductos del ELN son la provincia de Valderrama, en donde se ubican los municipios de Tasco y Beteitiva, y la provincia de Curabá en límites con norte de Santander, Arauca y la frontera con Venezuela, debido a que se encuentra el asentamiento de la comunidad indígena U'WA, lugar donde fueron asesinados indígenas estadounidenses.

**José Eliceo Vela**, periodista de *Boyacá 7 días*, advierte que la provincia de Lengupá en el oriente, en límites con el departamento del Casanare, es otra de las regiones que presentan dificultad para el desplazamiento de los periodistas debido a que está bajo control de los paramilitares. Se trata de los municipios de Campo Hermoso, Páez, San Eduardo, Berbeo y Zetaquirá. En el sur de Boyacá, en límites con los Llanos Orientales (Meta y Casanare) las dificultades para los periodistas se encuentran en la provincia de Neira, municipios de San Luis de Galeno y Santa Teresa, por la presencia mayoritaria de los paramilitares y los enfrentamientos con el ELN por el territorio. Es una región de cultivos de coca, además de laboratorios para el procesamiento. Es ruta de producción y distribución.

Otra zona crítica es occidente bajo o esmeraldífera, donde los “dueños o caciques” temen que los periodistas entren y denuncien los constantes abusos con las menores de edad, o el negocio de los esmeralderos con los “pájaros”, para el porte ilegal de armas y el control sobre los cultivos de coca. Este sector no se define como zona de actores armados a pesar de la presencia de reductos paramilitares. “Si me movilizo por allí, tengo que hacerlo camuflado”, comentó un periodista local. □

# III

## Región Pacífica

Valle del Cauca, Cauca y Choco,  
yla frontera con Panamá

**E**l Valle del Cauca presenta una de las más delicadas situaciones para el ejercicio periodístico. En el sur, en el puerto de Buenaventura, la delincuencia común, el narcotráfico y la guerrilla tienen contundente presencia. La relación del narcotráfico con la delincuencia común ya afectó al corresponsal local de *El País*, **Adonai Cárdenas**, quien desde los primeros días de abril de 2003 es víctima de llamadas amenazantes. Cárdenas incluso fue abordado nuevamente en diciembre de ese año en el omnibús en el que se movilizaba, y recibió una recomendación (o exigencia): deje de informar ciertas cosas que le hacen daño a Buenaventura, que ellos todavía no se han ido de aquí. Fue una clara referencia a los paramilitares en pleno proceso de desmovilización.

La situación de Buenaventura se explica por el enfrentamiento urbano entre milicias de las FARC y de los paramilitares con el ingrediente del narcotráfico. Además de las presiones de la clase política que manda mensajes a los periodistas sobre a qué personajes no tocar para evitar riesgos. Las zonas llamadas vedadas para la prensa son las conocidas como las de la antigua carretera al Mar: Sabaleta, Aguas Clara y Anchicallá; y en la zona marítima: Reposo y Río Maya.

En Buenaventura, el 70 por ciento de las muertes violentas corresponden a los actores violentos: narcotráfico, AUC y guerrilla. Hay una infiltración notable del narcotráfico en la vida política del puerto en sus instituciones.

Aquí los periodistas han suspendido todo desplazamiento a zonas rojas como río Raposo, antigua vía al mar, Bajo Calima, San Isidro e igualmente andan con mucho temor por algunos barrios de la comuna 12, o de Bajamar.

Se trata de toda la vía al mar hasta Buenaventura cuyos pueblos aledaños viven en la pobreza extrema y la guerrilla los ha convertido en informantes obligados. En esa vía son frecuentes los llamados retenes y quema de vehículos y mercancías pues se trata del más importante corredor vial del comercio exterior del Pacífico.

“Si ven que no pueden pasar, devuélvanse”, instruye una editora de *El País* a sus periodistas. Siempre están averiguando con los campesinos del sector si hay condiciones para desplazarse.

En el centro del departamento, especialmente la zona montañosa de Tulúa y Buga, la mayor presencia es de guerrilla y paramilitares. Aunque en estos momentos se está dando el proceso de desmovilización del Bloque Calima de las Autodefensas en el sitio de Galicia en Bugalargrande con el respectivo proceso de concentración de los ex combatientes, ésta ha sido por años una zona de control paramilitar.

En Tulúa, el 13 de abril de 2004, el periodista **Javier Jaramillo**, fue informado por parte del gestor de paz, **Fabio Cardoso**, y algunas emisoras, que las FARC estaban molestas por un informe suyo publicado en *El País* sobre la muerte selectiva de líderes comunales y transportadores de leche en la zona montañosa de Tulúa.

Jaramillo acudió a la organización Medios por la Paz, pero luego decidió no denunciar su caso, pues como muchos periodistas, consideran que la denuncia les complica la situación y que los procesos de evaluación de riesgo por parte del Ministerio del Interior son muy demorados.

Jaramillo explica que la situación del centro del Valle del Cauca se complicó en 1999 cuando llegaron las AUC al corregimiento de la Moralia, en la Cordillera Central. “Los pobladores estaban celebrando el día de la Virgen del Carmen cuando llegaron en dos camiones, se bajaron, rodearon la plaza, otros se metieron en el atrio de la Iglesia, sacaron de entre el público a dos personas y las mataron”, recuerda, añadiendo que la salida frente a la situación es, en la gran mayoría de los casos, la autocensura, evitar cubrir los homicidios de las vendetas. “Presentamos la noticia escueta, sin mayores detalles, diciendo que no se conocen las causas, aunque todos las sepamos”, añade.

Y en el norte, la situación está dada por el creciente narcotráfico en varias zonas del departamento. “Se trabaja en una línea delgada que amenaza con romperse todos los días, tener una fuente es obligatorio para poder informar, pero eso crea ataduras”, dijo un periodista que tuvo que autocensurarse apoyado por las directivas de su medio.

### Lucha sin cuartel

En Roldanillo es imposible desconocer la guerra a muerte entre las bandas de los “Machos vs. Los Rastrojos” por el control de los laboratorios y cultivos de la zona. Allí hay una lucha sin cuartel entre los supuestos narcotraficantes **Diego Montoya** y **Wilmer Varela**, alías “Jabón”. En Cartago, el problema es la dupla mafia-política.

Por último, existen dos zonas literalmente vedadas: El Cañón de Garrapata, en El Dobio, donde es imposible entrar por considerarse el santuario de los “capos” y la zona limítrofe con el Chocó, en San José del Palmar, por el control de los paramilitares. Allí no hay amenazas directas. “Lo llaman a uno para que colabore, y uno entiende que es una orden”. El mejor consejo para cualquier periodista es que actúe siempre como tal y no haga cubrimientos encubiertos.

**Andrés Monpotes**, corresponsal de *El Tiempo* describe así la situación en el Valle del Cauca: “En la zona rural de Buenaventura, que colinda con los Farallones de Cali, hay presencia de paramilitares. Un frente de las FARC también ronda la zona rural y de hecho se han presentado enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla. El corredor de los Farallones es preferida por estos grupos ilegales”.

Periodistas asesinados en la última década en diversas poblaciones del Valle del Cauca: **Abelardo Marín Pinzón**, editor y camarógrafo de Telepacífico (27 de mayo de 1994, por grabar imágenes de un narcotraficante); **Gerardo Bedoya** (20 de marzo de 1997, por sus columnas en *El País*, contra el narcotráfico y su infiltración en la política nacional); **Didier Arisatizabal**, de la Cadena Todelar (20 de mayo de 1997, porque a la guerrilla le incomodó que estuviera orientando a la emisora de la policía nacional en Cali); **Bernabé Cortés**, del noticiero local CVN (19 de mayo de 1998, luego de recibir amenazas del Cartel de Cali y del ELN); **Marco Antonio Ayala**, reportero gráfico de *El Caleño* (23 de enero 2003, víctima del crimen organizado, para evitar la publicación de fotografías de una mujer en la

Plaza de Toros, quien lo visitó en el periódico exigiéndole entregar los negativos); **Héctor Sandoval** (12 de abril de 2003, muerto por los disparos de un helicóptero que perseguía a una columna de las FARC, que había secuestrado a unos diputados de esta región); **William Soto Cheng**, del noticiero local de Telemar (27 de diciembre de 2003, en Buenaventura, por sus denuncias contra un fraude electoral en el que estaría vinculada la fuerza pública).

El departamento del Chocó se ha convertido en otro de los lugares peligrosos para el ejercicio del periodismo, según **Jairo Antonio Rivas Chalá**, corresponsal de radio Caracol. “La situación de extrema pobreza, la financiación de los medios a través de la pauta oficial y el conflicto, tienen amarrada la libertad de prensa”, afirma, y explica que los puntos de mayor dificultad son los del Medio Atrato, que comprende Río Sucio y Bojayá, donde hay presencia de las guerrillas de las FARC, del ELN y de los paramilitares. “También la zona de San Juan, con los municipios de Condoto, Tadó, Sití e Ismina. La vía más peligrosa es la de Quibdó a Itsmina, 75 kilómetros donde se presentan retenes y quema de buses. Allí en diciembre de 2004 el periodista **Raúl Balladares**, de la emisora Brisas de San Juan, estuvo secuestrado por el ELN”.

Las dificultades para los periodistas radican además en la imposibilidad de desplazarse por tierra. Para llegar a las poblaciones del Chocó hay que movilizarse a través de los ríos, Atrato, Andágueda y San Juan, que son escenarios de guerra.

**Adriana Vega**, editora regional de *El Tiempo* en el departamento de Antioquia, desde donde se cubre el departamento del Chocó, explica que “aunque nuestros periodistas en los últimos años no han tenido problemas graves, si hay prevención. Por ejemplo si vamos a viajar por carretera, nunca se hace después de las cinco de la tarde, lo mismo que por los ríos”.

**Leonardo Montoya Garcés**, un reconocido periodista de la zona que trabaja como corresponsal del noticiero CM&, realiza las imágenes para los noticieros de RCN-TV y dirige el espacio noticioso El Martillo, fue víctima de amenazas por parte de funcionarios públicos que se vieron afectados por las imágenes que mostró RCN. El noticiero exhibió un barrio de casas lujosas donde viven funcionarios, mostrando el contraste entre la pobreza de la ciudad y estas residencias, en el marco de una campaña para instalar un acueducto. “El director del hospital y el contralor delegado, cuyas residencias se mostraron, me llamaron muy molestos, y me amenazaron” contó Montoya, agregando que “la actividad periodística en este departamento se encuentra sujeta a la voluntad de los gamonales políticos de la región, quienes son los propietarios de las emisoras locales y de los medios impresos”.

“La influencia del narcotráfico en el gobierno departamental y el poder que han obtenido los gobernantes a través de dineros del erario público, además de la presencia de los grupos insurgentes de las FARC, el ELN, y las autodefensas, dejan muy poco espacio para el libre ejercicio de la profesión”, concluye.

En Cauca, la jefe de redacción del diario *El Liberal*, **Ariadne Villota Ospina**, considera que en los municipios de la Sierra, la Vega, Bolívar, Almaguer y San

Sebastián hay riesgo por la presencia guerrillera. Es zona selvática donde no se suele molestar a los periodistas, pero sí se enfrentan a “retenes investigativos” para averiguar de quién se trata.

“En las áreas de influencia de los indígenas guambianos, no hay riesgo pero es importante comunicarles la movilización por sus zonas, a través del Consejo Regional Indígena o al gobernador del Cabildo”, explica Villota.

La bota caucana es otra región de cuidado por la presencia guerrillera de las FARC. En julio de 2004 se registró un combate entre unos 200 guerrilleros del FARC que enfrentaron a 36 militares de la brigada de selva de Putumayo. El saldo fue de 13 soldados muertos.

En Cauca, el riesgo no sólo lo representa la presencia de los actores armados. Desde el sector político también provienen gran parte de las amenazas y presiones. Dos periodistas de CNC fueron amenazados en octubre de 2004 por sus denuncias contra el fraude en las campañas políticas. “Los políticos presionan para que ciertas informaciones no sean publicadas y lo hacen directamente a los dueños de los medios”, dijo una periodista.

El corresponsal de *El País* en Popayán, **Silvio Sierra**, fue advertido de un plan para asesinarlo por un informe suyo sobre las pandillas y delincuencia común en el departamento. No se sabe si las FARC están detrás de la amenaza.

En el Cauca fue asesinado **Manuel José Martínez**, de radio Súper de Popayán (28 de septiembre de 1993, por sus continuas denuncias). □



# IV

## Región de la Orinoquia

Arauca, Casanare, Meta y Vichada y nuevamente  
la frontera con Venezuela

**S**egún un informe de la Policía Nacional (*El Tiempo*, 20 de diciembre de 2004), Arauca es la región de Colombia donde se comete el mayor número de homicidios: 158 por cada 100 mil habitantes, por la incidencia de los grupos armados, el desarrollo de las economías de frontera, la impunidad y el impacto del narcotráfico. En Arauca también ha aumentado el asesinato de dirigentes sociales y las amenazas de muerte por parte de las Autodefensas.

En Arauca, han sido asesinados los periodistas: **Iván Darío Pelayo**, director de la radioemisora Llanorámica en Arauca (en Puerto Rondón, el 17 de agosto de 1995, por un comando del ELN, que lo acusaba de tener vínculos con los paramilitares); **Alfredo Antonio Matiz**, fundador de La Voz del Sinaruco (5 de enero de 1996, por la guerrilla); **Efraín Varela**, director de la radio Meridiano 70 (28 de junio de 2002, porque denunció los atropellos del ejército y los paramilitares en la región); y **Luis Eduardo Alfonso**, de la emisora Meridiano 70 y corresponsal de *El Tiempo* (18 de marzo de 2003, por amenazas de las AUC)

La prensa de Arauca ha sido muy golpeada en los últimos años: **Jorge Meléndez**, periodista de *El Tiempo* y el fotógrafo **Danilo Sarmiento** sufrieron una retención en una guarnición militar; el equipo periodístico de RCN-TV formado por **Ramón Eduardo Martínez**, **Duarley Guerrero** y **Carlos Julio García**, quienes habían sido secuestrados por la guerrilla de las FARC, tuvieron que exiliarse. Después del asesinato de **Efraín Varela**, se incrementaron las amenazas y se produjo el exilio de 16 periodistas de la región.

**Carmen Rosa Pabón**, periodista de La Voz del Sinaruco, quien formó parte del grupo de 16 periodistas que salieron de Arauca en marzo de 2003, contó: “Algunos regresamos, movilizándonos en vehículos especiales administrados por la policía y el DAS. Nos hemos estado reincorporando, con las limitaciones propias derivadas de las circunstancias de orden público que vive la región y la frontera con Venezuela. Convivimos con tres grupos armados, además de delincuencia y corrupción”.

La situación más grave es la de frontera con Venezuela en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

Fortul y Tame, al sur del departamento, tiene el mayor índice de muerte en los tres últimos años. En diciembre del 2004 en San Salvador, municipio de Tame, las FARC asesinaron a 16 personas en represalia con los pobladores por haber permitido la presencia de los paramilitares.

“Rumores van y rumores vienen. Un ambiente tan salpicado de conflicto es propicio para que cualquiera se atemorice. Utilizamos la red de comunicaciones que nos dio la FLIP y reportamos cada cosa, cada seguimiento, cada comentario. Tenemos que movernos en un ambiente enrarecido. Yo todavía tengo miedo, la familia tiene miedo. Cuando la masacre en San Salvador, yo solo le pedía a Dios sabiduría para poder narrar los hechos. Como por ejemplo contar que había niños de dos años con tiro de fusil en la cabeza. La autocensura reina como medida de supervivencia”, dice **Pabón**.

En el Meta, narra **Jorge Cárdenas Fonseca**, jefe de redacción de *Llano 7 Días*, “todo el departamento es crítico porque está controlado por la guerrilla de las FARC

y por tres grupos de paramilitares que de alguna forma condicionan el ejercicio periodístico, por cuanto ellos controlan el ingreso y la posibilidad de hablar con la gente. A veces muestran actitudes hostiles”.

En el año 2003, en una zona rural del municipio de Mapiripán, un equipo periodístico del diario *El Tiempo*, formado por el reportero gráfico **John Wilson Vizcaíno** y la periodista **Yineth Bedoya**, fueron retenidos durante tres días por un comandante guerrillero, al parecer en retaliación por algunas publicaciones.

El 10 de diciembre de 2004, en la Inspección de Jardín de Peñas, jurisdicción del municipio de Mesetas, un equipo periodístico de *Llano 7 Días* fue retenido temporalmente y despojado de sus útiles de trabajo, incluido el vehículo, cámaras del reportero gráfico, celulares y grabadoras.

En esta zona de la Orinoquia también hay dificultades para ingresar a algunos lugares de dominio de estos grupos. En el departamento del Meta la situación para los reporteros se ha deteriorado mucho. El periodista **José Iván Aguilar**, de la emisora Súper y corresponsal en Villavicencio de Noticias Uno, fue víctima de un atentado, luego de recibir amenazas de miembros de la Brigada VII. Había criticado al alcalde de Villavicencio por irregularidades en la construcción del edificio terminal de transportes. También fue amenazado el director de Eco Llanero, **José Dimos Rico**, por leer comunicados de la gobernación y de la Brigada. □



# V

## Región de la Amazonía

Caquetá, Guaviare, Vaupéz, Amazonas y Guanía,  
Putumayo y fronteras con Ecuador y Brasil

**V**iajar a la selva amazónica es internarse en la mayor reserva ecológica del planeta, entre especies vegetales y animales. Esta región de alta lluviosidad es considerada el “pulmón del mundo”.

En el río Amazonas, con un caudal de 120.000 metros cúbicos de agua por segundo y con una longitud de 6.275 kilómetros, en los cuales se cuentan cerca de 6.000 islas, desembocan los ríos Putumayo y Caquetá. Por estos ríos y sus numerosos afluentes se desarrolla el comercio y se comunican entre sí las poblaciones de la región selvática.

En el Amazonas, los periodistas coinciden en decir que el único problema se presenta en la zona fronteriza con el Putumayo, del sector conocido como la Chorrera hacia el Oriente, porque en el corregimiento de Puerto Alegría y la Chorrera se ha asentado las FARC con el propósito de fomentar el cultivo de coca.

“Toman a los colonos desplazados por las fumigaciones en el Putumayo y les pagan para sembrar allí. Asimismo en las regiones selváticas del suroccidente del Amazonas, las FARC habrían movilizado a un grupo de presuntos secuestrados, entre ellos la ex candidata presidencial **Ingrid Betancur**”, afirmó un periodista de la región.

En Tabatinga y Benjamín Herrera, dos poblaciones del Brasil fronterizas con Amazonas, existen pequeños carteles de narcotraficantes.

El departamento del Putumayo, es otro ejemplo de la intensa confrontación en la zona. Es una región selvática, fronteriza con Ecuador y centro de producción de coca, con absoluto dominio guerrillero, por años.

**Germán Arenas**, corresponsal de radio Caracol en Mocoa, es uno de los pocos periodistas que ejercen la profesión en el Putumayo. El considera que “los actores armados, AUC y FARC, no se han metido con los periodistas y por eso no he recibido condicionamientos. Las relaciones con la policía y el ejército son buenas. Hay comunicación fluida y sin embargo están las presiones naturales”.

“Para hacer periodismo se debe disponer de dos millones de pesos (alrededor de 8.000 dólares) para pagar el espacio radial y poder lanzar el noticiero aire. Las únicas fuentes que pueden sostener esos programas son entidades municipales. Ante el sectarismo político, le quitan o le dan al periodista. Una crítica al gobierno seccional origina el corte de la publicidad”, comenta Arenas.

Aquí hay sitios como el medio y el bajo Putumayo, municipio de Puerto Guzmán, con influencia FARC; Villa Garzón de influencia AUC y FARC; Puerto Caicedo, influencia AUC; Puerto Asís, influencia de ambos actores; Orito, influencia de AUC; La Hormiga, controlada por guerrilla y paramilitares; y La Dorada, también con ambos, y en donde el periodista debe desplazarse vistiendo su chaleco especial y su credencial, por cuanto hay que enfrentar a los miembros de estas organizaciones que piden identificarse. En los municipios del bajo Putumayo, el dominio de las AUC se hace en las cabeceras municipales, mientras en las zonas rurales la influencia es de la guerrilla.

Pero las mayores amenazas provienen en algunos casos de la fuerza pública en una abierta complicidad con los paramilitares. En el 2004, el periodista de Caracol

denunció que un sargento del ejército de apellido Sierra, conocido con el alias de Boquinche, supuestamente reunió a miembros de la comunidad de la vereda Arizona, para presentarles a cuatro personas que si bien estaban vestidas de civil tenían “aire” militar y estaban armados. El suboficial supuestamente los presentó como miembros de las AUC, agregando que eran primos y que trabajarían “hombro con hombro” y al que no le gustara esa idea, podía mejor irse del pueblo, “teniendo cuidado de no denunciar la situación porque sería ajusticiado”. Recordó Arenas que el comandante de la Brigada 27 de Selva en ese entonces, **Hernán Perico**, le pidió no divulgar esa situación hasta tanto no se tomaran las medidas con ese sargento. “Pero recibí otras presiones”, sostiene.

En la provincia ecuatoriana fronteriza de Sucumbíos se desarrollan encuentros binacionales para analizar una situación caracterizada por la inseguridad, debido a que esta zona se ha convertido en refugio de paramilitares, guerrilleros y delincuencia organizada. El Puente Internacional de San Miguel está desprotegido y, por ende, libre para todo lo que pueda entrar y salir: armas y cocaína.

“Es frecuente que cualquier persona que llegue a Putumayo sea retenida hasta tanto no se investigue su procedencia y las razones por las que está allí. En muchos casos se las han llevado y luego aparecen muertas. Pero eso no ha ocurrido con periodistas”, concluye Arenas.

En Putumayo, durante 2003, fueron asesinados dos periodistas: **Juan Carlos Benavides**, director de Noticias de la radio Manantial Stereo (22 de agosto en Puerto Caicedo, cuando se desplazaba a cubrir un consejo comunitario del presidente Uribe) y **José Nel Muñoz**, de una emisora local afiliada a Caracol (en un corregimiento de Puerto Asís).

El corresponsal de Caracol TV en Puerto Asís, **Carlos Mauro Rosero**, explicó que allí “no hay problemas de movilidad, pero tan pronto ocurrió el asesinato de Muñoz, nadie volvió a hacer un noticiero independiente. Los medios trabajan al servicio del gobernador por temor a perder la pauta publicitaria y porque se han autocensurado ante los actores del conflicto”.

En Caquetá, se puede confirmar por oficio la muerte de **José Duviel Vásquez** (6 de julio de 2001). El periodista de la Voz de la Selva puso en evidencia la existencia de una grabación en la que una ex alcaldesa de Florencia presuntamente entregaba dinero a unos concejales. Vásquez recibió además amenazas de los paramilitares. Aún están por esclarecerse los móviles de los crímenes de los dos directores de la misma emisora, asesinados un año antes: **Alfredo Abad** y **Guillermo León Agudelo**.

**Carlos Meyer**, corresponsal de RCN-Radio en Florencia, dijo que durante el 2004 la situación fue muy tensa para los periodistas. “Uno está cumpliendo con su trabajo, en el medio de todo, sin saber de donde le pueden tirar: si son los narcos, la guerrilla, los paras, la delincuencia común, los mismos entes gubernamentales y los funcionarios públicos, “sobre todo si uno mantiene posiciones independientes”.

“La última amenaza que recibí fue en julio de 2004. Vivía en un barrio lejos del centro, y a eso de las cuatro de la mañana salía de casa para encender la motocicleta,

cuando encontré un papel recostado contra la pared del frente de la casa. Era una amenaza concreta de las FARC: tenía que abandonar la ciudad en 24 horas o de lo contrario atacarían contra mi familia y la emisora. Me escondí adentro de la casa, con mi mujer, y una hora después llamé a mi jefe inmediato, quien me ordenó no moverme de mi hogar. En Bogotá me dijeron que estampara la denuncia ante las autoridades locales, por cuanto consideraron que el panfleto no era de las FARC”, contó Meyer, quien nunca pudo confirmar el origen de la amenaza.

Meyer advierte que en Caquetá se repite aquello de que las amenazas también provienen del sector de la política, al cual en los últimos años se le atribuye responsabilidad en los asesinatos de tres periodistas. RCN-Radio le ha recomendado a su corresponsal no salir del casco urbano de la ciudad, por razones de seguridad. El temor más próximo es el de un secuestro.

Debido a la presencia de AUC y FARC, se considera que hay riesgos para el desplazamiento de periodistas en municipios del Caquetá.

En el departamento del Guaviare, la situación es muy similar a la del departamento del Meta. Las zonas rurales de los municipios están bajo el dominio de la guerrilla. Entre tanto en el casco urbano de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno hay presencia de paramilitares. □



## Mario Prada Díaz | periodista colombiano



Era director del semanario Horizonte Sabanero. En su último editorial denunció malos manejos de los recursos públicos en la administración de Sabana Torres, departamento de Santander, Colombia, donde fue asesinado el 12 de julio de 2002. Un año después de su muerte, la Fiscalía dispuso la suspensión de la investigación del crimen con el argumento de que no fue posible la identificación e individualización de los responsables.

### **¡Actúe ahora!**

Si le indigna este crimen impune, exija acción. Visite nuestra página [www.impunidad.com](http://www.impunidad.com) y firme una carta que enviaremos al Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez, solicitándole que disponga lo conveniente para reactivar la investigación y el proceso judicial del caso, hasta que los asesinos sean castigados. O si prefiere, escríbanos a:

**Sociedad Interamericana de Prensa**

**1801 SW 3rd Avenue**

**Miami, FL 33129**

**Fax: (305) 635-2272**

**Email: [info@impunidad.com](mailto:info@impunidad.com)**

Este proyecto cuenta con el apoyo económico de la Fundación John S. y James L. Knight.

Patrocinado por



[www.impunidad.com](http://www.impunidad.com)

MHPR027